

Privatizaciones: polvos de aquellos lodos

Alfredo Acle Tomasini©

El 29 de diciembre de 1989, apareció perdida en la segunda sección del Diario Oficial, que ese día, por razones legales, suele ser muy voluminoso, una noticia trascendente para la vida del país, pero que ante el marasmo de la información presupuestal pasó relativamente inadvertida. A saber: el gobierno federal cedió a favor de Telmex los ingresos derivados del cobro del Impuesto Especial al Servicio Telefónico.

La mecánica fue sencilla, primero se autorizó un aumento de 5 por ciento a las tarifas de Telmex y sobre éste se aprobaron otros incrementos -por ejemplo 72 por ciento y 60 por ciento a la rentas básicas, comercial y residencial, respectivamente-, lo que permitió que esa empresa incorporara a sus ingresos de operación lo que antes captaba y enteraba al gobierno federal. De esta manera, el monopolio estatal dejó de ser una vía recaudatoria a favor de la hacienda pública para serlo en beneficio de su propia tesorería, con la salvedad de que estaba a escasos meses de convertirse en un monopolio privado.

Imaginemos que Pemex se privatizara mediante un proceso similar, y no será difícil concluir que este monopolio estatal, cuya operación y desarrollo ha sido afectado por el pago de impuestos y derechos, y por la infinidad de normas y controles a las que está sujeto, podría convertirse en un floreciente monopolio privado y, por ende, en una fuente de riqueza y poder para quienes fueran sus afortunados dueños.

No sorprende, por tanto, que la privatización de Telmex haya sido la palanca para cimentar la creación de un patrimonio individual que casi equivale a una tercera parte de la deuda externa del país. Y esto, en una nación con más de 40 millones de pobres, resulta en una comparación aberrante e indicativa de que algo no se hizo bien.

Privatizar es una política pública que, como cualquier otra, no es buena o mala per se. Su valoración depende del impacto que tenga en el desarrollo del país. Para ello, es necesario que se enmarque en una estrategia, que defina objetivos claros y medibles, que se implante correctamente y que, de manera periódica, se revisen los resultados para hacer los ajustes pertinentes.

Por tanto, la venta de empresas públicas es sólo una fase de un proceso de privatización de mayor envergadura. Desafortunadamente, la ola privatizadora confundió vender -en muchos casos, a cualquier precio y a cualquier persona- con privatizar, sin que ello respondiera a una visión de largo alcance de cara a los intereses nacionales. Todo se resumía a un juego de sumas y restas; cuánto cobra y ahorra el Estado. Hoy nos damos cuenta de que en las columnas de las adiciones y sustracciones no se consideraron muchos conceptos que cambian el signo del resultado final.

Por ejemplo, con ese criterio, harto simplista, se vendió Imevisión, hoy TV Azteca, sin considerar que antes debió haber habido un análisis estratégico de lo que podría representar, para la vida cultural y política del país, la creación de un duopolio privado. Todo se resumió a pesos y centavos. Y hoy, en una nación con cien millones de habitantes, dos familias controlan la televisión pública. Comparación que también resulta aberrante, más aún si consideramos que su fuerza les permite retar a los Poderes constitucionales.

La privatización bancaria tampoco partió de una estrategia del sector financiero que ofreciera puntos de referencia para orientar y valorar las propuestas de los potenciales compradores. Menos aún se evaluó la calidad y experiencia de éstos. De pronto, las instituciones financieras quedaron en manos de banqueros recién nacidos, pero bien conectados, que en el apogeo de su imperio lograron que el TLC los protegiera de la competencia de los bancos extranjeros hasta que su ineptitud obligó a abrirles las puertas sin cortapisas.

No extraña lo negativo del balance final: sólo uno de los 18 bancos privatizados permanece en las mismas manos; la mayoría desapareció; algunos de los otrora banqueros fueron carne de presidio; pesan en la deuda pública los 70 mil millones de dólares que costó el rescate bancario, y prácticamente toda la banca del país pertenece a matrices extranjeras, algunas de las cuales han sido, por la vía de su propio rescate, nacionalizadas -de facto- por sus sendos gobiernos.

No podemos regresar el reloj, pero sí aprender de lo que hicimos mal. Está claro que toda política pública debe partir de un ejercicio de reflexión que se transforme en una estrategia. Sin este marco, corremos el riesgo de convertir en polvareda los lodos que hoy no sepamos evitar.